

CENSURA, GARROTE Y MUERTE CIVIL MARCA PERÚ

Muestra colectiva en el LUM. Huelga nacional del magisterio. Censura en la FIL.

No hace falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que, en la censura política ocurrida recientemente en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) contra la exposición colectiva de grabados en serigrafía '<u>Resistencia Visual 1992. Carpeta colaborativa</u>', se encuentra la mano o garra del aprofujimorato. El dato de que un congresista del mayoritario grupo parlamentario fujimorista, el cantante Francesco Petrozzi, haya reclamado el predominante sesgo contra su fracción, en dicha muestra de arte, es un dato baladí. Dicha censura, perpetrada por el flamante ministro de cultura Salvador del Solar (conocido actor y director de cine, con estudios en abogacía), tuvo además la sutileza o birlibirloque de mantener dicha exposición, que gira en torno al año 1992, a la vez que impelió a renunciar al ahora ex director de dicho museo, el sociólogo Guillermo Nugent.

Los diversos posts e imágenes que andan circulando por las redes sociales dan buena cuenta de lo sucedido, y las características y orientación generales de dicha colectiva inaugurada el 16 de este mes. En aquella serie de informaciones, denuncias, aclaraciones, discusiones cruzadas, destaca el pronunciamiento oficial del Ministerio de Cultura, así como la posición asumida por la curadora de la muestra, la artista visual Karen Bernedo (ver respectivamente <u>aquí</u> y <u>aquí</u>). Todo lo cual da una

medida plausible de lo que trata este nuevo dislate del poder político en el terreno cultural del Perú: un país cuyas clases dominantes no dan la talla en el concierto de la región, al reproducir actitudes, prejuicios e ideas propias aun de la época colonial.

La exposición tiene como finalidad incidir, desde los trabajos hechos por 36 artistas en grabado serigráfico, en algunos sucesos marcados en el año 1992 y que lo perfilan tal un rubicón político: como el autogolpe del fujimorato y sus secuelas (represión, desapariciones y matanzas desde el Estado y sus agentes paramilitares), algunas acciones del PCP-Sendero Luminoso cuando centró su ofensiva en Lima (como el atentado en la calle Tarata del barrio mesocrático y turístico de Miraflores, o el accionar letal contra dirigentes de la izquierda oficial como Maria Elena Moyano, por ejemplo), y la captura del jefe de dicha organización, Abimael Guzmán, y parte de su comité central. Se trata de una muestra que discurre entre los cauces y narrativas abiertos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), es decir, en la versión que este organismo estatal ha expresado sobre dicha época en su extenso informe del 2003.

Así que la censura se ha ejecutado contra una exposición cuya finalidad central no era otra que poner el acento crítico allí donde no debiera dolerle significativamente al poder imperante. Señalar a un gobernante corrupto y prisionero –desde el 2009, por delitos de lesa humanidad– como Alberto Kenya Fujimori, a asesores corruptos y corruptores como el agente Vladimiro Montesinos, a ex líderes senderistas también encarcelados como Abimael Guzmán Reynoso, Elena Iparraguirre, entre otros, o rememorar a dirigentes sociales que cayeron, por diferentes motivos, durante dichos años de la guerra interna, como Pedro Huillca o Maria Elena Moyano, no es algo nuevo ni apunta contra las estructuras económicas ni columnas políticas vertebrales del modelo social imperante en el Perú actual.

Si esta muestra –o cualquier otra– hubiese puesto el acento en las contradicciones entre, por ejemplo, el discurso democrático burgués y las cotidianas prácticas que lo niegan, desde las sucesivas políticas de Estado, o si hubiese revelado de qué están hechas las diversas máscaras del régimen constitucional reinstaurado a inicios de los 80 hasta hoy, o los forados y manipulaciones antipopulares del régimen electoral, se entendería mejor el miedo que podría propiciar algo así al poder establecido. O si se hubiese puesto el acento en revelar los trasfondos ideológicos en el modelo del emprendedurismo, donde prevalece el sálvese quien pueda (el 'a codazos aprendí'), o en el populismo mercachifle y cómplice de los medios de comunicación (por llamarlos de algún modo), o en el cine, el teatro y buena parte del régimen culturoso local, otro sería el cantar y se entendería mejor la censura.

Aquel escenario, en realidad, es donde urge hacer estallar artefactos culturales, que reabran y potencien la conciencia crítica en el imaginario promedio de un público ya suficientemente adiestrado en repetir algunos lugares comunes de lo que supuestamente es y no es la democracia: manipulaciones de la memoria oficial y una falaz reconciliación nacional mediantes.

Al no ser dicha exposición colectiva una confrontación radical y amenazante en los términos anteriores, no podía haber espacio de exhibición más apropiado para una muestra de este talante que el LUM (contra lo que afirma un atemorizado ministro de cultura, que desde ya se suma al coro de las geishas más monas del parlamento). Es decir, el espacio museístico donde se ampara, asienta y

reproduce la memoria institucional –expresada en las muy discutibles conclusiones de la CVR– sobre el proceso de guerra interna de los años 80 y parte de los 90: un acontecimiento histórico cuyas resonancias no cesan de reactualizarse hasta hoy, como puede verse en este debate. El documento del informe final de la CVR, si bien contempla en diferentes tramos detalles valiosos del comportamiento violatorio a los derechos fundamentales de las personas -además de actos de crueldad perpetrados con sordidez por policías y militares-, tales detalles se diluyen o evaporan al momento de realizarse las conclusiones por cada capítulo del informe, y peor aún en el resumen y conclusiones finales de todo el informe. Todo lo anterior trasluce la contradicción entre datos, análisis y conclusiones de manera grotesca, aunque solo percibida por quien se tomó la molestia de leer las más de 10.000 páginas del informe de la CVR.

Por cierto que nada de lo anterior pretende minimizar el acierto de varios de los artistas que participan con sus grabados en 'Resistencia Visual 1992', ni mucho menos su meritoria y, ahora estamos advertidos, impertinente posición de resistencia contra el statu quo prevaleciente en el ambiente político local. Sino que se trata de situarlo en su real dimensión, más allá de la guerra fría mediática o del pensamiento de ciertos sectores de la sociedad peruana. Recordemos que si dicho establishment tiene las características que tiene (con predominancia de Fuerza Popular y sus aliados del Apra y el oficialismo) es porque cosechó mayoritaria votación en las elecciones presidenciales del año pasado.

Por su parte, una congresista como Maritza Glave, integrante de la izquierda parlamentaria, ha constatado in situ que en absoluto dicha exposición representa amenaza alguna para el poder en este país, y evidencia la sinrazón de la censura cometida. En efecto, solo una voluntad autoritaria, de fibra criptofascista, puede explicar dicha acción perpetrada por el ministro de cultura, pero digitalizada desde la bancada parlamentaria aprofujimorista. La dirigencia económica y política del Perú sigue sin darse cuenta de que lo mejor que podría hacer para legitimarse, y reproducirse más invisiblemente, es utilizar este tipo de exposiciones e iniciativas. Así podría simular mejor el ser un poder democrático que permite la disidencia, y que no teme a que se señalen a ciertos personajes y sucesos, por lo demás ampliamente historizados, ya que son apenas la punta del iceberg de una muy prolongada secuela de políticas de Estado.

En buena cuenta, la marca Perú es la de un poder que impide a esta república ser verdaderamente una nación, y que desde sus inicios –y antes, en la colonia– se halla sometida a sectores dominantes contrarios a la modernidad que otrora definió a la burguesía en sus albores. Un añejo poder impedido siquiera de jugar –sic– a la democracia, y ampay me salvo, para así amenguar las brasas siempre latentes de la rebeldía e insumisión populares.

La buena noticia, para quienes nos inscribimos de palabra y acción en el camino democratizador, es que este tipo de ceguera política y torpezas en el campo cultural abonan el terreno, cada vez más fértil, para repotenciar un proceso de auténtica transformación.

La soberbia del Ministerio de Educación, la desmedida represión policial, y la campaña todavía en curso de macartismo mediático y oficial contra la justa huelga magisterial, en el Perú, constituyen otro grotesco ejemplo de por dónde van los reflejos de los sectores dominantes en este país. Y da la pauta para que más temprano que tarde los caminos, atajos y puentes que sostienen el enclenque

edificio del poder económico y político peruanos no solo se caigan, sino que se terminen desplomando, según el célebre aforismo acuñado por el gerente de infraestructura vial de la Empresa Municipal Administradora de Peaje (Emape), José Luis Justiniano, a propósito de los huaycos y sus efectos que asolaron Lima en marzo de este año. Como hecho inédito de la movilización nacional del magisterio está el mérito de haber roto el cerco ideológico de la consabida criminalización contra la protesta: ésta se ha abierto paso, ganando un alto prestigio y ejemplo ante la población, pese a los denuestos de poderosos grupos mediáticos.

A lo anterior cabe sumar otro caso reciente. Así como en dicha mega huelga del magisterio peruano se trata de cercar y condenar a muerte civil a los profesores y trabajadores que tuvieron algún pasado vinculado a la lucha armada de los 80-90 (por la cual tantos purgaron condenas y carcelería muchas veces excesivas por la desidia administrativa), en la reciente Feria Internacional del Libro (FIL), que cada año organiza la Cámara Peruana del Libro, se perpetró una censura contra el cortometraje titulado ‘Camila’, del cineasta, escritor y editor, Walter Villanueva Azaña, cuando ya había sido programado para el día 02 de agosto en la sala Eielson. Este autor fue notificado, un día antes por chat, de que por ‘decisiones de arriba’ (léase la mesa directiva de la CPL presidida por el editor Germán Coronado) se había retirado su corto a cambio de una película mexicana (México fue el país invitado este año).

Villanueva Azaña, quien estudió matemática y literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha testimoniado sobre sus experiencias anteriores en la FIL, donde nunca tuvo problema e incluso presentó varios libros de su sello editorial Mano Alzada. Y que todo cambió desde que Germán Coronado asumió la presidencia de la Cámara (ver aquí). Como ha declarado el propio afectado, la verdadera razón de fondo no se halla en aquel cortometraje, que aborda la historia de una niña migrante que vende caramelos y quiere ser bailarina de ballet en Lima, sino que Walter Villanueva purgó más de quince años de carcelería en el penal Miguel Castro Castro acusado de ser parte del PCP-SL. Al recobrar la libertad, se dedicó al rubro editorial; y así fue que publicó el libro “De puño y letra”, de Abimael Guzmán Reynoso, en el 2009. Todo lo cual, por cierto, le ocasionó problemas y procesos, hasta que finalmente fueron desestimados por el propio Poder Judicial.

Este otro intento de muerte civil contra alguien que cumplió su condena penitenciaria, perpetrado en la última FIL, no fue denunciado por la prensa nativa, ni mereció pronunciamiento alguno de esta institución ni de nadie vinculado a dicha feria de marras (ni un grito, ni una chilla apagada siquiera, ni una raya en un muro). Una vez más el pacto infame de censurar sin dar la cara, sin explicaciones, autoritarismo impune.

Las autoridades del campo cultural siguen errando al buscar que quienes purgaron condenas por acciones subversivas sean desplazados de la sociedad civil, en lugar de integrarlos o abrirles debate público. Este régimen de poder, este país oficial, solo aúpa el pensamiento único: estar alineado con el modelo neoliberal y las narrativas oficiales sobre la guerra de aquellos años. Lo demás es terrorismo, apología, peligro, amenazas senderistas, etcétera. Todo lo cual devela el estrecho margen que tiene el poder en el Perú para fluir en el juego democrático burgués. Lo que, a su vez, revela la rapacidad de sus sectores dominantes y sus representantes políticos.

Cuanto más se criminalice la disidencia y la protesta, y más alambradas y muros se levanten alrededor de la impunidad, la componenda bajo la mesa (o los cuarteles) y una vida social hecha a la medida de las élites y sus testaferros, protegidos por jueces, fiscales, abogados, comunicadores y fuerzas represivas, mayor será la indignación que levanten, y mejores vientos soplarán para atizar la leña seca de la injusticia y la hojarasca acumulada todos estos siglos.

CODA. Mención aparte, en toda aquella historia del LUM, merece el referido ministro de cultura, Salvador del Solar, quien merced a su trayectoria profesional y mediática fue recibido con beneplácito e ingenuas esperanzas por buena parte de la intelectualidad peruana progre(sista). Vista su actual performance con lo sucedido, se merece el Oscar al mejor papel secundario, por agachar la cabeza ante el régimen aprofujimorista, y de paso hacer evidente la grotesca complicidad entre el Legislativo y el Ejecutivo actuales. Nada de lo que brilla es necesariamente oro, y menos cuando se sirve orgánicamente a una institución injusta y abusiva como el viejo Estado peruano.

Perú.Comuna colectivo de creación & crítica
Agosto 2017